



TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
AUTO DE INTERLOCUTORIO No 190

Santiago de Cali, primero (01) de septiembre de dos mil veinte (2020)

MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD ELECTORAL. ÚNICA INSTANCIA
DEMANDANTE:	OSCAR CAICEDO LUNA
DEMANDADO:	YOLANDA ROMERO MILLÁN Y OTROS
PROCESO:	76001-23-33-000-2019-01108-00
ASUNTO:	AUTO INTERLOCUTORIO. RESUELVE EXCEPCIONES PREVIAS A LA LUZ DEL DECRETO 806 DE 2020

I. ANTECEDENTES

La parte demandante, actuando en nombre propio y en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, pretende la nulidad de los actos de elección proferidos por el Consejo Nacional Electoral: Formulario E26 por medio del cual la Comisión Escrutadora Departamental del Valle del Cauca declaró la elección de la señora Yolanda Romero Millán como Concejal del municipio de Dagua del Departamento del Valle del Cauca para el periodo 2020-2023; se anule el Formulario E27 credencial de la señora Yolanda Romero Millán como concejal del municipio de Dagua, perteneciente al partido de la Unidad Nacional, No 8 en el Tarjetón; y, como consecuencia de las declaraciones anteriores, se llame a ocupar la curul al demandante.

La demanda fue radicada el 3 de diciembre de 2019 (Fl. 97); por auto interlocutorio No 482 del 9 de diciembre de 2019, se admitió (Fls. 98-100).

El apoderado de la demandada se notificó personalmente en la Secretaría de la Corporación el 27 de enero de 2020 (Fl. 137), corriendo el término para la contestación del 31 de enero al 20 de febrero de 2020¹ (Fl. 218). Contestó la demanda el 7 de febrero de 2020² (Fls. 191-209), es decir, dentro del término legal. Al Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil, Concejo de Dagua, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio Público se les notificó la demanda el 9 de diciembre de 2019 (Fls. 101-106), corriendo términos para contestar del 13 de diciembre de 2019 al 29 de enero de 2020³ (Fl. 218). La Registraduría Nacional del Estado Civil contestó el 27 de enero de 2020 (Fls. 184 al 190) es decir, en tiempo. El Consejo Nacional Electoral contestó anticipadamente el 27 de enero de 2020 (Fls. 159-183) es decir, en tiempo, y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no contestó la demanda.

El traslado de las excepciones propuestas se surtió el 24 de febrero de 2020 (Fl. 218 vuelto), que transcurrió durante los días 25, 26 y 27 de febrero de 2020 (Fl. 219) sin pronunciamiento alguno de la contraparte. Los términos se suspendieron los días: 4 de diciembre de 2019 (paro judicial); 17 de diciembre de 2019 (día del poder judicial); del 20 de diciembre de 2019 al

¹ Se dejan pasar 3 días de que habla el literal f) del artículo 277 del CPACA

² Ibidem

³ Ibidem

12 de enero de 2020 (vacancia judicial); y los días 23 y 24 de enero de 2020 (cierre de la Secretaría por inventario).

El 28 de febrero de 2020, ingresó el expediente al despacho a fin de fijar fecha y hora para la realización de la audiencia inicial de que trata el artículo 283 del CPACA (Fl. 219); en auto del 4 de marzo de 2018, se fijó para el 16 de marzo de 2020 (Fl. 223), audiencia que no se realizó debido a lo dispuesto en los Acuerdos PCSJA20-11517⁴ y PCSJA20-11518⁵

II. CONSIDERACIONES

Mediante decretos 417 del 17 de marzo y 637 del 6 de mayo de 2020 el Gobierno Nacional dispuso “*el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional*”, con ocasión de la pandemia declarada por la OMS por motivo de la Covid-19, razón por la que el Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo PCSJA20-11518 del 16 de marzo de 2020 “*Por el cual se complementan las medidas transitorias de salubridad pública adoptadas mediante el Acuerdo 11517 de 2020*” dispuso que los funcionarios y empleados judiciales trabajen desde sus casas, por lo que se hace necesario adelantar todas las actuaciones que se deriven de esta providencia a través de los medios electrónicos, como lo contempla el artículo 186 del CPACA.

Por Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de junio de 2020 se levantó la suspensión de términos decretada por el Consejo Superior de la Judicatura entre el 16 de marzo y el 31 de junio de 2020⁶.

De otro lado, el Gobierno Nacional expidió el 4 de junio de 2020, el decreto legislativo No 806⁷, donde, entre otras consideraciones, señaló:

“(…) Que igualmente, es importante crear disposiciones que agilicen el trámite de los procesos judiciales y permitan la participación de todos los sujetos procesales, contrarrestando la congestión judicial que naturalmente incrementó la suspensión de los términos judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura con fundamento en la emergencia sanitaria.

Que, por lo anterior, es necesario **crear un marco normativo que se compadezca con la situación actual que vive el mundo y especialmente Colombia, que perdure durante el estado de emergencia sanitaria**, y que establezca un término de transición mientras se logra la completa normalidad y aplicación de las normas ordinarias.

Que este marco normativo **procurará que por regla general las actuaciones judiciales se tramiten a través de medios virtuales y excepcionalmente de manera presencial**. Por lo que se debe entender que las disposiciones de

⁴“Por el cual se adoptan medidas transitorias por motivos de salubridad pública”

Artículo 1. Suspender los términos judiciales en todo el país a partir del 16 y hasta el 20 de marzo de 2020, excepto en los despachos judiciales que cumplen la función de control de garantías y los despachos penales de conocimiento que tengan programadas audiencias con persona privada de la libertad, las cuales se podrán realizar virtualmente. Igualmente se exceptúa el trámite de acciones de tutela.

⁵ “Por el cual se complementan las medidas transitorias de salubridad pública adoptadas mediante el Acuerdo 11517 de 2020”

Dispuso que los funcionarios y empleados judiciales trabajen desde sus casas, por lo que se hace necesario adelantar todas las actuaciones que se deriven de esta providencia a través de los medios electrónicos, como lo contempla el artículo 186 del CPACA.

⁶ Por Acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11521, PCSJA20-11526 y PCSJA20-11529 de marzo de 2020; PCSJA20-11532, PCSJA20-11546 de abril de 2020; y PCSJA11547, PCSJA20-11556 y PCSJA20-11549 de mayo de 2020 dispuso suspender los términos de las actuaciones judiciales salvo algunas excepciones.

⁷ Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

este decreto complementan las normas procesales vigentes, las cuales seguirán siendo aplicables a las actuaciones no reguladas en este decreto.

(...)

Que estas medidas, se adoptarán en los procesos en curso y los que se inicien luego de la expedición de este decreto (...). (Resalta la Sala).

En esta secuencia, el artículo 12 dispone:

“Artículo 12. Resolución de excepciones en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. De las excepciones presentadas se correrá traslado por el término de tres (3) días en la forma regulada en el artículo 110 del Código General del Proceso, o el que lo sustituya. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre ellas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en las excepciones previas.

Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 Y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juzgador las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.

Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva se tramitarán y decidirán en los términos señalados anteriormente.

La providencia que resuelva las excepciones mencionadas deberá ser adoptada en primera instancia por el juez, subsección, sección o sala de conocimiento. Contra esta decisión procederá el recurso apelación, el cual será resuelto por la subsección, sección o sala del tribunal o Consejo de Estado. Cuando esta decisión se profiera en única instancia por los tribunales y Consejo de Estado se decidirá por el magistrado ponente y será suplicable.

Si bien el artículo 283 del CPACA no indica de manera expresa la resolución de excepciones previas en el marco del proceso de nulidad electoral, lo cierto es que la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado ha indicado que: “...*el juez electoral en aplicación del principio de integración normativa, puede y debe pronunciarse en la audiencia inicial sobre las excepciones previas propuestas por las partes*”⁸.

En este orden, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto 806 de 2020 analizado en precedencia, la Sala se pronunciará sobre las excepciones previas propuestas.

Caso concreto:

La parte demandada Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil propusieron la que denominaron *falta de Legitimación en la causa por pasiva* (Fls. 161-162 vuelto); la primera, porque la entidad no tuvo participación en la comisión escrutadora municipal que llevó a cabo los escrutinios en el municipio de Dagua, Valle, ni designó los miembros de estas quienes son seleccionados y elegidos por los tribunales superiores del

⁸ Auto de Sala del 18 de febrero de 2016, radicación 25000-23-41-000-2015-00101-02 CP. Alberto Yepes Barreiro

Distrito Judicial como lo establece el artículo 157 del Código Electoral donde los Registradores Distritales y Municipales actúan como secretarios de éstos. En consecuencia, nada tiene que ver frente a las irregularidades que presuntamente se presentaron con ocasión de las elecciones realizadas el pasado 27 de octubre de 2019. Además, el CNE solo es competente de realizar los escrutinios a nivel general nacional, lo que indica que son las comisiones escrutadoras distritales y municipales las encargadas de hacer los escrutinios y declarar las elecciones municipales y locales, tal y como lo establece el decreto 2241 de 1986; y, la segunda, porque dicha entidad no es la encargada de hacer la declaración de la elección de los Concejales del Municipio de Dagua, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto 1010 de 2010, solo dirige y organiza el proceso electoral y demás mecanismos de participación ciudadana y elabora los respectivo calendarios electorales; legalmente, no emite acto administrativo alguno ni operación que determine cuando un candidato está inhabilitado o impedido ni cuando un voto es válido o no, y por ello no determina, por lo que en aras del principio de eficiencia y economía procesal, solicita se desvincule a la entidad.

Jurisprudencialmente se ha establecido que, la legitimación en la causa de hecho es la calidad que le permite a una persona que hace parte de una relación jurídica, formular demandas u oponerse a las pretensiones que en su contra se formule; supone establecer que quien demanda tiene la titularidad para reclamar el interés jurídico que se debate en el proceso, que no la procedencia de las pretensiones incoadas, de tal suerte que la legitimación en la causa no se identifica con la titularidad del derecho sustancial, sino con ser la persona que por activa o por pasiva es la llamada a discutir la misma en el proceso⁹; y la legitimación en la causa material alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda¹⁰.

En esta secuencia, a la Registraduría, para esta etapa procesal le asiste legitimación formal porque de conformidad con el numeral 15 del artículo 5 del Decreto 1010 de 2000, coordina con los demás organismos y autoridades competentes del Estado el ejercicio de las acciones orientadas al desarrollo óptimo de los eventos electorales y de participación ciudadana; además, participa en la elaboración del formulario E-26, acto administrativo demandado.

Respecto del Consejo Nacional Electoral, de conformidad con lo establecido en el artículo 265 de la C.P.¹¹, le corresponde, entre otros, velar por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías; de otro lado, de conformidad con el artículo 166 del Código Electoral¹², los

⁹ Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de junio 12 de 2014, C.P. Olga Mérida Valle de la Hoz, Radicado N° 52001-23-31-000-2004-00732-01 (33658).

¹⁰ Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de mayo 14 de 2018, C.P. M. María Adriana Marín, radicado N° 0500-12-33-1000-2004-0419401(40175).

¹¹ Funciones del Consejo Nacional Electoral

¹² <Artículo modificado por el artículo 12 de la Ley 62 de 1988. El nuevo texto es el siguiente:> Las comisiones escrutadoras distritales, municipales y auxiliares resolverán, con base en las actas respectivas, las reclamaciones que se hayan presentado ante los jurados de votación conforme al artículo 122 de este Código.

Las apelaciones que se formulen contra las decisiones de las comisiones escrutadoras auxiliares, así como los desacuerdos que se presenten entre los miembros de éstas, serán resueltos por las correspondientes comisiones distrital o municipal, las que también harán el escrutinio general de los votos emitidos en el distrito o municipio, resolverán las reclamaciones que en este escrutinio se propongan, declararán la elección de concejales y alcaldes y expedirán las respectivas credenciales.

Cuando sean apeladas las decisiones sobre reclamos que por primera vez se formulen en ese escrutinio general, o se presenten desacuerdos entre los miembros de las comisiones distrital o municipal, estas se abstendrán de expedir las credenciales para que sean los delegados del Consejo Nacional Electoral quienes resuelvan el caso y expidan tales credenciales.

delegados del Consejo Nacional Electoral son superiores funcionales de las Comisiones Escrutadoras Distritales o Municipales; y, por último, el Consejo Nacional Electoral lo es de sus delegados. Así mismo, de conformidad con los artículos 122, 158, 164 y 192 del Código Electoral, es el Consejo Nacional Electoral a través de sus delegados quienes conocen las reclamaciones con ocasión de los escrutinios a las elecciones de las autoridades territoriales a las distintas corporaciones a elegir asambleas, concejos y juntas administradoras locales.

Por último, el despacho no advierte configurada ninguna excepción que deba decretar de oficio.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: APLICAR al proceso las disposiciones del decreto legislativo 806 de 2020 en la forma dispuesta en la parte motiva de este auto.

SEGUNDO: Tener por contestada oportunamente la demanda por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y, Yolanda Romero Millán. Téngase por no contestada la demanda por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

TERCERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional de Estado Civil, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

CUARTO: Se reconoce personería al abogado Luis Espaza Piza identificado con la C.C. N° 16'791.946 de Cali (V), y T.P. N° 212.725 del C.S. de la J., como apoderado judicial de Yolanda romero Millán, C.C. N° 20'837.311, en los términos y fines indicados en el poder que obra a folio 155.

QUINTO: Se reconoce personería al abogado Víctor Manuel Hernández Alzate identificado con la C.C. N° 1'113.624.302 de Palmira (V) y T.P. N° 212.252 del C.S. de la J., como apoderado principal de la Registraduría Nacional del Estado Civil; y al abogado Arley Julián Fernández Torres identificado con la c.c. N° 1'144.057.772 de Cali (v) y T.P. N° 252.055 del C.S. de la J., como apoderado suplente de la misma entidad en los términos y fines indicados en el acto de designación N° 22286 de 2019 que obra a folio 174 y vuelto, acompañado de la documental que acredita la calidad del poderdante doctor Luis Francisco Gaitán Puentes, Jefe Oficina Jurídica (Fls. 175-183).

SEXTO: Se reconoce personería a la abogada María José Polanco Perdomo identificado con la C.C. No 1'075.287.151 de Neiva (H) y T.P. N° 293.582 del C.S. de la J., como apoderada judicial del Consejo Nacional Electoral en los términos y fines indicados en el acto de delegación N° 7425 de 2019 que obra del folio 165 y vuelto.

SEPTIMO: Se reconoce personería al abogado Víctor Manuel Hernández Alzate identificado con la C.C. No 1'113.624.302 de Palmira (V) y T.P. No 212.252 del C.S. de la J., como apoderado judicial principal de la Registraduría Nacional del Estado Civil; y al abogado Arley Julián Fernández Torres identificado con la C.C. No 1'144.057.772 de Cali (V) y T.P. No 252.055 del C.S. de la J., como apoderado judicial suplente de la Registraduría Nacional del Estado Civil en los términos y fines indicados en el acto de designación No 22284 de 2019 que obra del folio 66 y vuelto, acompañado de la documental que acredita la calidad del poderdante doctor Luis Francisco Gaitán Puentes, Jefe Oficina Jurídica (folios 97-105).

OCTAVO: NOTIFÍQUESE la presente providencia por estado electrónico, en atención a lo dispuesto por el artículo 9° del Decreto 806 de 2020.

NOVENO: Para efecto de notificaciones y/o comunicaciones, se tendrán en cuenta las direcciones electrónicas y físicas que obran en el expediente, así: parte demandante: vasquezoa95@gmail.com, parte demandada: Yolanda Romero Millán: yolyuz@hotmail.com y luespal1@hotmail.com; Registraduría Nacional del Estado Civil: notificacionesjudicialval@registraduria.gov.co, vmhernandez@registraduria.gov.co, Consejo Nacional Electoral: cnenotificaciones@cne.gov.co, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado: procesosnacionales@defensajuridica.gov.co, Concejo Municipal de Dagua: concejodaguavalle@hotmail.com, Ministerio Público: procjudadm20@procuraduria.gov.co

De conformidad con el artículo 2 del Decreto 806, el canal oficial de comunicación e información para recibir memoriales es el correo electrónico: rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co

DÉCIMO: Ejecutoriada la presente providencia, ingrese nuevamente el expediente al despacho para lo pertinente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ZORANNY CASTILLO OTALORA
Magistrada